**RECURSO DE REVISIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR**

EXPEDIENTE: REP-204/2025

ACTORA: **DATO PERSONAL
PROTEGIDO**¹

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE CHIHUAHUA

MAGISTRADA INSTRUCTORA:
ADELA ALICIA JIMENEZ CARRASCO

SECRETARIA: ANDREA YAMEL
HERNANDEZ CASTILLO y
VERÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ

Chihuahua, Chihuahua; a diecinueve de junio de dos mil veinticinco.²

SENTENCIA DEFINITIVA del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua por la que se **CONFIRMA** el acuerdo de desechamiento de denuncia de fecha dos de junio, dictado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en los autos del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-038/2025.

GLOSARIO

Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Local:	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
Denunciante / promovente / actora / recurrente:	DATO PERSONAL PROTEGIDO

¹ Dato personal protegido de conformidad con los artículos 6 y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracciones IX y X; 31 y 80 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 100; 106 fracciones II y III; 107; 110; 111; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 109; 117 fracciones II y III; 120; 121; y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

² Todas las fechas corresponden al año dos mil veinticinco, salvo mención en contrario.

Instituto:	Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.
Ley Electoral:	Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Ley Reglamentaria:	Ley Electoral Reglamentaria de los artículos 99, 100, 101, 102 y 103 de la Constitución para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua.
PES:	Procedimiento Especial Sancionador.
PEEPJE	Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025
REP:	Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SCJN:	Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Secretaría Ejecutiva:	Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral.
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tribunal:	Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua.
VPMRG	Violencia política contra las mujeres por razones de género

1. ANTECEDENTES

1.1 Reforma del Poder Judicial de la Federación. El quince de septiembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de reforma al Poder Judicial.

1.2 Decreto de Reforma para la Elección de Personas Juzgadoras. El veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro, en cumplimiento al mandato constitucional antes mencionado, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Local, en

las que se estableció el proceso de elección por voto popular de las personas juzgadoras en el Estado.³

1.3 Inicio del Proceso Electoral para la elección de personas juzgadoras. El veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, el Consejo Estatal del Instituto dio inicio formal al PEEPJE, para la elección de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina, así como de Juezas y Jueces de primera instancia y menores del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

1.4 Acuerdo del Consejo Estatal de clave IEE/CE30/2025. Mediante acuerdo de veintinueve de enero, el Consejo Estatal del Instituto aprobó el plan integral y el calendario del proceso electoral judicial del Estado, a través del cual se describen de forma pormenorizada las actuaciones que conformarán el desarrollo del PEEPJE.

1.5 Publicación de la Convocatoria para participar en la evaluación y selección de la elección electoral judicial. El diez de enero, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 03, la “CONVOCATORIA para participar en la evaluación y selección de postulaciones de la elección extraordinaria 2024-2025 de las personas que ocuparán los cargos del Poder Judicial del Estado, conforme al procedimiento previsto en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua”, en los términos aprobados por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chihuahua el día nueve del mismo mes.⁴

1.6 Publicación de la Ley Electoral Reglamentaria. El veintitrés de enero, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 07, el Decreto por el que se expidió la Ley Electoral Reglamentaria de los artículos 99,

³ Decreto LXVIII/RFCNT/0172/2024 I P.O. anexo al Periódico Oficial número 103, publicado en fecha veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro.

⁴ Consultable en la siguiente dirección electrónica oficial:
<https://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosConvocatorias/510.jpg>.

100, 101, 102 y 103 de la Constitución para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua.⁵

1.7 Presentación de denuncia. En fecha veintinueve de mayo, **DATO PERSONAL PROTEGIDO**, como candidata a **DATO PERSONAL PROTEGIDO** en el PEEEPJ, presentó ante el Instituto, una denuncia en contra de Jesús Elimelec Ramírez Franco, Fernanda Rico y Fernando Reyes, en su carácter de periodista y redactor del medio de comunicación El Heraldito de Chihuahua, el medio de comunicación digital denominado Omnia y/o quien resulte responsable, por la presunta comisión de conductas que, desde la óptica de la denunciante, pudieran ser constitutivas de VPMRG.

1.8 Acto impugnado. El dos de junio, el Instituto acordó desechar la denuncia precisada en el punto anterior, aduciendo que no obra en los autos elemento alguno que de manera indiciaria permita establecer que las expresiones denunciadas sustenten elementos de género que pudieran trascender a una afectación de los derechos político-electorales de la denunciante.⁶

1.9 Presentación del Medio de impugnación. El cinco de junio, la parte actora presentó ante la Unidad de Correspondencia del Instituto, escrito de medio de impugnación en contra del acuerdo descrito en el punto anterior, de cuyo escrito se advierte que la parte recurrente señala como asunto del escrito la interposición de un “Recurso de reconsideración y/o Juicio para la protección de los derechos político-electorales.”⁷

1.10 Informe circunstanciado. El nueve de junio, el Secretario Ejecutivo del Instituto, remitió a este Tribunal el informe circunstanciado respectivo, así como las demás actuaciones necesarias para la sustanciación del asunto.

⁵ Decreto LXVIII/EXLEY/0184/2025 II.P.E.

⁶ Visible de la foja 52 a la foja 63 del REP

⁷ Visible de la foja 10 a la foja 22 del REP

1.11 Formación, registro y turno del expediente ante este Tribunal.

En idéntica fecha, el Magistrado Presidente ordenó la formación del medio de impugnación que nos ocupa, como un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, registrado bajo la clave de identificación JDC-202/2025, así como turnarlo a la ponencia de la Magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco.

1.12 Reencauzamiento. Con fecha once de junio, a propuesta de la ponencia instructora, el Pleno del Tribunal determinó reencauzar el juicio descrito en el punto anterior a un Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador, por ser esta la vía adecuada para su sustanciación y resolución, mismo que fue radicado bajo la clave de identificación **REP-204/2025**, y remitido nuevamente a la ponencia instructora.

1.13 Admisión y apertura de instrucción. El dieciséis de junio, la ponencia instructora admitió el recurso de mérito y abrió la instrucción del mismo.

1.14 Cierre de instrucción, circulación de proyecto de resolución y solicitud de convocatoria. El dieciocho de junio, una vez sustanciado el medio de impugnación, se cerró el periodo de instrucción, se elaboró y circuló el proyecto de cuenta y se solicitó a la Presidencia del Tribunal convocar a Sesión Pública de Pleno, para su discusión y, en su caso, aprobación.

2. COMPETENCIA

Este Tribunal es **competente** para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un REP interpuesto con motivo del desechamiento de la denuncia presentada por la promovente; ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, de la Constitución Local, así como, 83, fracción III, 84 y 95, fracción II de la Ley Reglamentaría.

3. PROCEDENCIA

Se considera que el presente recurso cumple con los requisitos procesales previstos en la Ley Reglamentaria, con motivo de lo siguiente:

3.1 Forma. El escrito de impugnación cumple con los requisitos establecidos por el artículo 105, de la Ley Reglamentaria.

3.2 Oportunidad. El recurso de mérito fue interpuesto en tiempo, toda vez que el acto impugnado le fue notificado a la parte actora el día nueve de mayo, y el respectivo medio de impugnación se presentó el día once de mayo, por lo que se encuentra dentro del plazo de dos días previsto para el caso de los REP en el artículo 96 de la Ley Reglamentaria.

3.3 Legitimación e interés jurídico. Se tienen por cumplidos estos requisitos, toda vez que el medio de impugnación se presentó por quien ostenta el carácter de denunciante en el IEE-PES-38/2025 que dio origen al presente REP y, en consecuencia, resulta ser la persona que sufre una afectación directa a su esfera jurídica de derechos con motivo del acto que se controvierte.

3.4 Definitividad. Este requisito se ve colmado, ya que no existe medio de impugnación que deba ser agotado previamente a la resolución del presente recurso.

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO

4.1 Síntesis de agravios

Del análisis del escrito del medio de impugnación se obtiene que la recurrente expresa, en síntesis, los siguientes motivos de disenso:

- a) **Error en la interpretación de la competencia material.** Manifiesta que la autoridad responsable incurrió en un grave error al desechar la denuncia por considerar que la VPMRG requiere que el agresor sea un actor electoral, y que las expresiones denunciadas afectan

directamente su campaña electoral, pues fueron difundidas en un ámbito judicial vinculado a su función pública y reproducidas en redes sociales, generando un impacto diferenciado en su imagen como candidata.

- b) **Violación al deber de juzgar con perspectiva de género.** Expresa que el Instituto omitió aplicar el test de cinco elementos para identificar la comisión de VPMRG, conforme a la Jurisprudencia 21/2028, emitida por el TEPJF.
- c) **Omisión en el análisis del impacto electoral.** Señala que las expresiones motivo de la denuncia no son una mera crítica, sino que son ataques personales con intención de desacreditar su candidatura, aunado a que fueron noticias que se subieron en las redes sociales los días previos al cierre de su campaña, generando un clima de desprestigio y afectando su derechos a una campaña en igualdad de condiciones.
- d) **Violación a la Jurisprudencia 48/2016 del TEPJF.** Alega que la autoridad responsable tenía la obligación de observar el contenido de la Jurisprudencia 48/2016, misma que obliga a las autoridades electorales a actuar oficiosamente ante la posible comisión de VPMRG, y así evitar una afectación a sus derechos político electorales, pero prefirió hacer un análisis superficial, sin valorar el contexto estructural de discriminación que enfrentan las mujeres en política.

Del mismo modo, manifiesta que quien resuelve es un “HOMBRE” (*sic*), por lo que no existe objetividad, pues éste no se siente vulnerado en sus derechos por no pensar ni sentir como mujer, cuestión que lo hace carecer de objetividad y pulcritud en su resolución.

- e) **Análisis superficial de las expresiones denunciadas.** Menciona

que las expresiones denunciadas no son crítica política válida, sino ataques misóginos que refuerzan estereotipos de que las mujeres son “emocionales” o “poco serias” para cargos judiciales.

- f) **Se le niega asesoría técnica.** Señala que le fue negada la asesoría técnica por parte de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense, al mismo tiempo que se le desechan las dos (*sic*) denuncias; que no existe objetividad para resolver, siendo una institución que sin razonamientos lógico jurídicos desecha a diestra y siniestra, apoyados con personajes (*sic*) que no les gusta asesorar ni atender a nadie.

4.2 Metodología de estudio

De los agravios hechos valer por la parte recurrente, se advierte que los mismos se encaminan a controvertir el desechamiento de la denuncia por parte del Instituto, por un supuesto incumplimiento a su obligación de aplicar la de perspectiva de género.

En ese sentido, dada la relación que existe entre los mismos, se procederá a su análisis en forma conjunta sin que ello genere un perjuicio a la parte actora de conformidad con lo previsto en la jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: **“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”**.⁸

4.3 Pretensión de la parte actora y planteamiento de la controversia

De su escrito de impugnación, se obtiene que la parte actora busca que este Tribunal revoque la determinación combatida, por medio de la cual se desechó el escrito de queja antes señalado y, por consiguiente, se admita la queja para que se dé trámite al procedimiento sancionador.

⁸ Lo anterior no genera perjuicio alguno a la recurrente, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6

Así, la controversia en el presente asunto consiste en determinar si el acto combatido es conforme a Derecho o, por el contrario, se debe revocar el acuerdo de desechamiento emitido por la autoridad responsable.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1 Tesis de la decisión

Del estudio en conjunto de los motivos de disenso planteados por la actora, este Tribunal considera que éstos devienen **INFUNDADOS** por las consideraciones que se detallarán en el presente apartado.

5.2 Marco normativo

➤ Generalidades de la violencia de género

La violencia contra las mujeres es una realidad que, mediante mecanismos institucionales y sociales impulsados en la mayoría de las ocasiones, desde la sociedad civil, ha cobrado visibilidad.

El marco legal en que se sustenta el derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de conformidad con los artículos 1° y 4°, párrafo primero, de la Constitución Federal y en su fuente convencional en los artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do Pará”);⁹; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; así como de la Recomendación General 19 del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.¹⁰

Inicialmente fue delimitada al ámbito de lo privado, identificada primordialmente como violencia física, psicológica o sexual; con

⁹ Artículo 1. La violencia contra la mujer se define como cualquier conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, en los ámbitos público y privado.

¹⁰ Sentencia emitida en los expedientes SUP-REC-109/2020 y acumulado

posterioridad, análisis más pormenorizados, complejos y transversales permitieron identificar otros tipos, formas y modalidades de violencia contra las mujeres y, en el escenario público, la violencia política por razones de género¹¹ se hizo patente conforme las mujeres fueron ganando espacios en el ámbito público y su participación democrática se fue generalizando.

Así, visibilizar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la esfera pública, cobra relevancia en la medida en que, su persistencia, constituye un obstáculo para el desarrollo de las mujeres en el ámbito político, impide su participación en condiciones de igualdad en la toma de las decisiones públicas y, con ello, se constituye como un freno para el desarrollo social, político y económico de los países, obstaculizando el desarrollo social.

Entendido lo anterior, se hace evidente que la violencia contra las mujeres en su vida política constituye un problema de derechos humanos que obstaculiza el avance hacia la igualdad sustantiva y, en consecuencia, hacia el desarrollo humano sustentable. Es una problemática latente a nivel mundial, que incide sobre la dinámica democrática en términos de género y se manifiesta cotidianamente —aunque con mayor intensidad durante los procesos electorales— en el ejercicio de la ciudadanía política de las mujeres.¹²

➤ **Violencia política de género**

Conforme dispone el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la VPMRG es toda acción u

¹¹ El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), establecido para monitorear su implementación, adoptó la definición de género que se refiere a las “diferencias entre mujeres y hombres social y culturalmente construidas”

¹² Violencia contra las mujeres en política: hoja de ruta para prevenirla, monitorearla, sancionarla y erradicarla. PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo © ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres © IDEA Internacional, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. P.21. Consultable en el enlace

<https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023-06/5eeb7511-c851-4b46-a15d-0089190e14a6.pdf>

omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar:

- a) El ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres;
- b) El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad;
- c) El libre desarrollo de la función pública; y,
- d) La toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y el ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Continúa señalando la normatividad en comentario, que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando:

- a) se dirijan a una mujer por su condición de mujer;
- b) le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Ahora bien, los tribunales electorales han profundizado sus análisis e interpretaciones en la materia para delimitar con toda certeza, qué elementos deben confluír para tener por acreditada la existencia de VPMRG, pues no todas las expresiones dirigidas a mujeres en el ámbito público configuran, per se, este tipo de violencia.

En efecto, la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 21/2018¹³ ha definido la violencia política de género como cualquier acción u omisión que, basada en elementos de género, ejerza, permita, tolere, promueva o reproduzca algún tipo de violencia política en contra de las mujeres, que tengan por objeto o resultado limitar, menoscabar, impedir o anular el

¹³ Jurisprudencia 21/2018. VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, el acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones, facultades y prerrogativas, o su desarrollo político.

Así, conforme al invocado criterio jurisprudencial, para determinar la existencia de VPMRG se requiere acreditar, además de que fueron dirigidas contra una mujer, que:

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;
2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;
3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;
4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y
5. Se basa en elementos de género, es decir: I. se dirige a una mujer por ser mujer, II. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; y, III. afecta desproporcionadamente a las mujeres

De tales disposiciones normativas e interpretativas se desprenden claramente los requerimientos constitutivos de la VPMRG, pues para su debida configuración, es necesaria la plena acreditación de cada uno de elementos que han sido delimitados; circunstancia que no es menor, pues aunque se ha dicho que la violencia contra las mujeres es una práctica común, naturalizada e invisibilizada, es indispensable que el adecuado análisis de los elementos legales que la conforman acrediten, sin lugar a dudas, que los hechos que se denuncien constituyan de forma material este tipo de violencia.

En esta lógica, el marco legal e interpretativo de lo que es la VPMRG ha sido objeto de modificaciones y análisis concienzudos por lo que, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de abril de dos mil veinte, se reformaron y adicionaron diversos ordenamientos legales en materia de VPMRG, con la finalidad de implementar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres en la vida política y pública del país.

Así, en el Artículo 20 Bis, párrafo tercero, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se reconoció que puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares, para, posteriormente, determinar un listado de acciones constitutivas de VPMRG.¹⁴

➤ **Obligación de Juzgar con perspectiva de género¹⁵**

Juzgar con perspectiva de género es un imperativo constitucional que obliga a todos los órganos, niveles y agentes del Estado a impartir justicia a partir del reconocimiento de las diferencias entre los sexos.

En esta lógica, resulta contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.¹⁶

¹⁴ Artículo 20 Ter de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

¹⁵ Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 5, fracción IX. Perspectiva de género.

¹⁶ Pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P./J. 9/2016 (10a.), Décima Época, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I. Registro: 2012594. Rubro: PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL

El artículo 5, fracción IV de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, define la perspectiva de género como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

En otras palabras, la perspectiva de género es una categoría de análisis que sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a partir de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas para determinar la vida de hombres y mujeres a partir de su sexo biológico.¹⁷

Estas disposiciones normativas obligan a que, en toda denuncia que señale hechos que pudieran constituir VPMRG, esta metodología debe ser la base para su análisis, incluso si la denunciante no lo hubiere solicitado, pues la obligación de actuar con este enfoque es, precisamente, del órgano jurisdiccional.

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al juzgar con perspectiva de género, las y los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se

¹⁷ Scott W., Joan. "El género: una categoría útil para el análisis histórico", en Martha Lamas compiladora, *El género: La construcción cultural de la diferencia sexual*, PUEG-UNAM, México, 1996.

tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.¹⁸

En esta lógica, aplicar la perspectiva de género en la impartición de justicia, es un imperativo que incluye identificar, entre otros elementos, estereotipos de género.

➤ **Estereotipos de género**

El Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres¹⁹ refiere que, para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres con elementos de género, es indispensable tomar en cuenta que muchas veces la conducta se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada.

En ese sentido, toda autoridad electoral debe analizar las conductas visibilizando los estereotipos que subyacen en un discurso y los efectos que éste genera, para luego determinar cuáles deben ser las consecuencias jurídicas que se deben atribuir a dicho discurso, a fin de no permitir que la indebida normalización de la violencia política minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias.²⁰

Entre la multiplicidad de estereotipos que existen, los estereotipos de género se distinguen por estar orientados a un conjunto definido de grupos sociales: al grupo de las mujeres, al grupo de los hombres y a los grupos que conforman las diversas identidades de género o minorías sexuales.²¹

¹⁸ Pleno, Tesis: P. XX/2015 (10a.), Décima Época, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015*, Tomo I. Registro: 2009998. Rubro: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA.

¹⁹ Consultable en el enlace electrónico https://www.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf

²⁰ Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y Juicios de revisión constitucional electoral. - SUP-JDC-1706/2016 y acumulados. - Lorena Cuéllar Cisneros y Partido de la Revolución Democrática. - 28 de septiembre de 2016.

²¹ Protocolo para juzgar con perspectiva de género. SCJN. P 49. Visible en el enlace <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero>

En este orden de ideas, para determinar si nos encontramos frente a un estereotipo de género, es necesario atender a lo que al respecto señala el Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN²², cuya fuente se localiza en el texto de Rebecca J. Cook & Simone Cusack:²³

- **Estereotipos de sexo.** Aquellos centrados en los atributos y las diferencias físicas y biológicas existentes entre hombres y mujeres.
- **Estereotipos sexuales.** Se basan en las características o cualidades sexuales que son, o deberían ser, poseídos por hombres y mujeres respectivamente, así como a la interacción sexual entre ambos.
- **Estereotipos sobre roles sexuales.** Se fundan en los papeles o el comportamiento que son atribuidos y esperados de hombres y mujeres a partir de construcciones culturales y sociales, o bien, sobre su físico.
- **Estereotipo compuesto.** Aquel que interactúa con otro estereotipo de género. Atribuyen características y roles a diferentes subgrupos de mujeres.

Así, es indispensable que el análisis, realizado desde la perspectiva de género, incluya la verificación de qué estereotipos subyacen cuando se analizan conductas que pudieran ser constitutivas de VPMRG; esto es así pues, como se dijo inicialmente, la VPMRG no es cualquier acto contra una mujer, pues para su configuración se requiere analizar si, en los hechos narrados, en las conductas denunciadas, en las publicaciones que se denuncian, los mensajes involucran de manera directa o indirecta, estereotipos de género.

➤ **Procedimiento especial sancionador**

²² Consultable en <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero>

²³ Rebecca J. Cook & Simone Cusack. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Perspectivas Legales Transnacionales. https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/reprohealth/estereotipos-de-genero.pdf

Conforme lo dispone la legislación electoral, cuando se denuncian hechos que pudieran constituir VPMRG, el procedimiento aplicable es el que contempla el artículo 280, numeral 1), inciso b), de la Ley Electoral.

Tal disposición normativa prevé que la Secretaría Ejecutiva del Instituto, es la autoridad encargada de instruir el Procedimiento Especial Sancionador dentro y fuera del proceso electoral cuando se denuncie la comisión de conductas que constituyan entre otras, VPMRG.

Luego, el artículo 280 BIS numeral 1), de la Ley en comento señala que la investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa, exhaustiva y con perspectiva de género; mientras que, en su artículo 281 numeral 1), prevé que cualquier persona con interés jurídico podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante el Consejo Estatal o ante las Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral.

Ahora bien, la sola presentación de una denuncia no lleva aparejada, de forma automática, su admisión. Esto es así pues, la propia normativa obliga a la autoridad sustanciadora a, previo a su admisión, llevar a cabo el análisis del cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad enunciados en el numeral 287 BIS, numeral 4) de la Ley Electoral.

Luego, a fin de evitar actos de molestia que no encuentren sustento en probanzas que, razonablemente, lleven a presumir de forma objetiva a la autoridad sustanciadora, que los hechos narrados en la denuncia pudieran configurar las infracciones narradas, la propia legislación prevé supuestos en los que la denuncia puede ser desechada. Así lo dispone el artículo 287 BIS de la precitada Ley Electoral en su numeral 6), en que se señala que, en los procedimientos especiales sancionadores relacionados con VPMRG la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral desechará la

denuncia cuando: a) No se aporten u ofrezcan pruebas y b) Sea notoriamente frívola o improcedente.

Entonces, de la disposición normativa en estudio se desprende la obligación que tiene la autoridad sustanciadora de desechar la denuncia cuando, desde un análisis preliminar, advierte que no fueron aportadas las pruebas conducentes y apropiadas para acreditar la posible existencia de los hechos denunciados, o bien, **que los mismos no constituyen una infracción a las normas electorales.**

➤ **Libertad de expresión y labor periodística**

La Constitución Federal, en su artículo 6,²⁴ prevé que es deber del Estado garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, consagrado en los artículos 19 párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13 párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así mismo, en su artículo 7, establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, y que tal derecho no puede ser restringido a través de la censura. Es decir, estos preceptos constitucionales establecen un derecho que implica la libre manifestación de ideas y opiniones; ello, ya que el derecho a la libertad de expresión es genérico en el sentido de que es un derecho humano del que gozan todas las personas en México. Sobre este tema, la Sala Superior ha definido diversos elementos que componen el derecho a la libertad de expresión, tales como:

- i. Sus objetivos fundamentales son la formación de una opinión pública libre e informada, la cual es indispensable en el funcionamiento de toda democracia representativa.

²⁴ Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

- ii. El sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones de quienes deseen expresarse a través de los medios de comunicación.
- iii. La libertad de expresión no es absoluta y debe ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos derivados de su interacción con otros elementos del sistema jurídico.
- iv. Por ejemplo, los límites a la expresión y manifestación de las ideas son el respeto a los derechos, la reputación de las demás personas, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, y el derecho a la honra y a la dignidad de la persona.

Aunado a ello, ha sido criterio de la Sala Superior que la libertad de expresión debe maximizarse en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no hacerlo nugatorio, particularmente en el desarrollo de campañas electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, lo cual se corresponde con la dimensión deliberativa de la democracia representativa.²⁵

Sin embargo, también ha sido criterio reiterado que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo que también encuentra un límite válido en la manifestación de expresiones, ideas o información que pueda constituir violencia política en razón de género; es decir, la libertad de expresión no puede ser utilizada para ejercer violencia política en razón de género.²⁶

Lo previo, ya que en una democracia constitucional, que tiene una dimensión deliberativa, según lo ha determinado en diversas ocasiones la

²⁵ Sentencia SUP-REP-17/2021.

²⁶ SUP-REP-623/2018 y SUP-RAP-20/2021 y acumulado.

SCJN, todas las personas no sólo tienen derecho a ser tratadas dignamente, sino también a ser tratadas en pie de igualdad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Federal.

Por lo cual, resulta relevante que las manifestaciones o expresiones realizadas a través de los distintos medios, no afecten directa o indirectamente a un género, a través del fortalecimiento de estereotipos y promoción de violencia.

Al efecto, conforme a la línea jurisprudencialmente trazada por la Sala Superior,²⁷ dentro del entorno del discurso o debate político, el ejercicio de estas libertades (como genuinos derechos fundamentales) amplía el umbral de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o afirmaciones vertidas durante la contienda electoral, en tanto ello se cristalice de cara a temas que pueden ser de interés público para la sociedad.

Bajo esa premisa, no sería transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones, cuando estas – apreciadas y valoradas en su contexto– aportan elementos para la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando ello tenga lugar, entre personas afiliadas, militantes, candidatas, dirigentes y ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad.

Cabe destacar que la libertad de expresión es un pilar en el desempeño de la actividad periodística, tutelada por los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, respecto de los cuales la Sala Superior se ha pronunciado en el sentido de que, la labor periodística tiene una tutela jurídica protectora, en tanto que, permite la difusión de ideas y de información de carácter público.

²⁷ Jurisprudencia 11/2008 de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”

En ese sentido, la mencionada Sala Superior ha considerado que, la actividad periodística tiene una presunción de licitud que debe derrotarse mediante las correspondientes pruebas, además de que, en caso de duda, el operador jurídico debe preferir la interpretación de la norma que sea más favorable al ejercicio de la actividad periodística.

De ahí que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; motivo por el cual la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública.

Además de que, la presunción de licitud de la que goza la labor periodística sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. Lo cual encuentra sustento en la Jurisprudencia 15/2018, de rubro: **PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.**

5.3 Caso concreto

Este Tribunal estima **INFUNDADOS** los agravios en estudio por las razones que se precisan a continuación:

En primer término, se considera que la actora parte de una premisa incorrecta al establecer en su medio de impugnación que el motivo de la falta de competencia material establecida por el Instituto para desechar la denuncia de mérito, derivó de que las partes que se señalan como presuntas agresoras no son actores electorales.

Contrario a lo afirmado por la recurrente, la autoridad responsable sí observó en sus razonamientos que conforme a lo dispuesto por los artículos 20 bis y 20 ter, fracción VIII, de la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la VPMRG puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

Establecido lo anterior, se debe resaltar que para poder pronunciarse respecto de la admisión o desechamiento de alguna queja, la autoridad tiene la obligación de verificar la existencia de los hechos denunciados, así como determinar si éstos son susceptibles de poder llegar a actualizar una infracción en materia electoral.

Así, contrario a lo afirmado en el escrito de impugnación, la Secretaría Ejecutiva determinó la improcedencia de la denuncia a partir de un estudio preliminar del expediente, sin exceder su parámetro de atribuciones y competencia formal, analizando los hechos denunciados, así como los elementos que obran en autos y el contexto en que se realizaron, a fin de determinar si existían elementos de los que pudiera inferirse -siquiera de forma indiciaria- la comisión de una posible infracción constitutiva de VPMRG.

En concreto, en cumplimiento a lo establecido en la Jurisprudencia 45/2016²⁸ emitida por la Sala Superior, el Instituto realizó un desglose de la totalidad de las probanzas y el resto de las diligencias para su perfeccionamiento, analizando el contenido de las ligas electrónicas proporcionadas por la denunciante, certificadas mediante Acta Circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-105/2025,²⁹ a la luz de la normativa en la materia y el contexto en que estos se realizaron, a efecto de establecer si era posible determinar de manera clara, manifiesta,

²⁸ Jurisprudencia 45/2016. QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.

²⁹ Visible de la foja 55 a la foja 59 del REP.

notoria e indudable que los hechos de la denuncia constitúan una violación a la normativa en materia electoral.

Del análisis en comento, la autoridad instructora consideró que, desde una óptica preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, de los hechos denunciados no se desprenden elementos de los cuales se pueda inferir, ni aun de manera indiciaria, la probable comisión de actos que pudieran configurar la infracción de VPMRG, argumentando qué:

“... de los hechos narrados por la quejosa en su escrito de denuncia, no se desprenden ni advierten elementos que bajo la apariencia del buen derecho permitan acreditar que las manifestaciones denunciadas, se dirijan a ella por el solo hecho de ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella... En ese sentido, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se considera que los actos denunciados no trascienden a la esfera político electoral y, en todo caso, estarían amparados por la libertad de expresión en el contexto del debate propio del proceso de elección que se desarrolla actualmente en el país para la conformación de los órganos jurisdiccionales que constituyen los poderes judiciales, es decir, se encuentran dentro del marco de la crítica y discursos, lo que en sí mismo, no rebasa los límites de la libertad de expresión.”

En el mismo sentido, razonó que las expresiones denunciadas no pretenden demeritarla por el simple hecho de ser mujer, más bien son expresiones derivadas del ejercicio periodístico relacionadas con un procedimiento de investigación y/o una denuncia de la cual la actora y su esposo forman parte.

Así, este Tribunal comparte dichas conclusiones, porque del análisis preliminar de los hechos materia de la denuncia, no se advierte que las expresiones estén dirigidas a la actora por el hecho de ser mujer, ni

pretendan demeritar su idoneidad para ser juzgadora sólo por su género, así como, tampoco se desprende que en las mismas se hiciera uso de estereotipos de género que la coloquen en una posición de desventaja frente al género masculino ante la opinión pública, sino que se trata de expresiones que cuestionan su actuar en relación a un procedimiento judicial del cual ella y su esposo aparentemente forman parte.

Aunado a que, como lo refiere la responsable, el hecho de que la actora sea candidata a juzgadora, implica que está sujeta al escrutinio y crítica dura, que desde luego pudiera resultar incómoda; sin que se observe una asimetría de poder que la ubique en una posición vulnerable y de desventaja frente a los denunciados.

De igual manera, del acto impugnado se observa que la autoridad responsable sí reconoció a la recurrente el carácter de candidata a un cargo de elección popular como juzgadora de primera instancia; tomó en cuenta que los hechos denunciados se dieron en el marco de la campaña electoral; identificó que las personas denunciadas son quienes se señalan en el escrito de denuncia; determinó que la denunciante está sujeta a un margen mayor de apertura a la crítica y a la opinión pública; arribó a la conclusión de que, desde una óptica preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, de los hechos denunciados no se desprenden elementos de los cuales se pueda inferir de manera indiciaria la probable comisión de VPMRG; en consecuencia, no identificó elementos de ningún tipo de violencia.

Por lo tanto, contrario a lo que esgrime la recurrente, la autoridad responsable sí verificó de manera preliminar la correspondencia de los hechos materia de denuncia con los elementos que establece la Jurisprudencia emitida por el TEPJF, identificada con el número 21/2018, sin embargo, no identificó elementos aunque sea indiciarios, respecto a una posible infracción de VPMRG.

Ahora bien, esta autoridad jurisdiccional no encuentra elemento alguno que haga presuponer que tales determinaciones fueron realizadas en virtud a que la autoridad responsable es hombre, tal como trata de hacer valer la recurrente pues, contrario a lo que suele pensarse, la visión patriarcal no es privativa de los hombres o, en su caso, del género masculino.

A fin de comprender por qué, la aplicación de la perspectiva de género en la impartición de justicia está desvinculada del sexo de la persona que realiza el análisis, en primer término es necesario comprender que el sistema patriarcal es un orden social basado en la división sexual y en un conjunto de acciones y relaciones estructuradas de acuerdo con el poder.³⁰

De esta forma, el patriarcado como sistema de dominación no es privativo de los hombres, pues forma parte de la colectividad y del orden social, es la base sobre la que se estructuran las relaciones sociales, económicas, culturales, políticas y educativas de todas las sociedades del orbe y, en su preservación, con más o menos conciencia, participa la sociedad en su conjunto.

En consecuencia, la reproducción de los patrones de género los realizan hombres y mujeres por igual; por ello, como fue señalado líneas supra, la perspectiva de género es una herramienta metodológica de análisis para identificar los desequilibrios de poder entre los sexos, a partir de la construcción social de género, y la obligatoriedad en su aplicación no es privativa de los hombres, asumiendo que, si quien imparte justicia es mujer, de forma natural y autónoma comprenderá de manera justa lo que siente la denunciante cuando también es mujer.

Nada más lejos de la realidad pues, con alarmante frecuencia y de forma inconsciente, las propias mujeres reproducen el sistema patriarcal del que

³⁰ Protocolo para juzgar con perspectiva de género. SCJN. P 49. Visible en el enlace <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero>

también forman parte; abundan casos en que las mujeres en la política o en la impartición de justicia reproducen mensajes misóginos y cargados de estereotipos.

En atención a lo razonado, este Tribunal estima que no le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que, el mero hecho de que el Secretario del Instituto sea hombre, le haya causado perjuicio alguno ya que, como se analizó con antelación, el antes mencionado, previo al desechamiento, llevó un análisis preliminar completo y exhaustivo de las probanzas ofrecidas por la denunciante, mediante el cual arribó a la conclusión de que de los hechos narrados y de las expresiones denunciadas, en conjunto, no se advierten elementos de género que permitan acreditar la vulneración de derechos político-electorales de la quejosa, ni que se trate de un trato diferenciado sustentado en relaciones asimétricas de poder, ni en el uso de estereotipos de género que se materialicen en una discriminación y/o vulneración de los derechos político-electorales de la quejosa.

Ello pues -se reitera- es necesario visualizar que juzgar desde la perspectiva de género no se traduce en que los órganos encargados de instruir y resolver los asuntos que se ponen a su consideración, estén obligados a resolver el fondo conforme a las pretensiones planteadas solamente en atención al género de las partes implicadas, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia para la interposición de cualquier medio de defensa.³¹

Finalmente, respecto a la negativa de asesoría técnica por parte de la Defensoría Pública referida, se advierte que dicha acción no es atribuible a la autoridad responsable, toda vez que, si bien, la defensoría es una

³¹ Sirve como criterio orientador, la tesis aislada II.1o.1 CS (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl Estado de México, de rubro **PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS** (consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016 [dos mil dieciséis], tomo IV, página 3005); referida al resolver el recurso SUP-REC-851/2018 y acumulado.

instancia administrativa del Instituto, ésta cuenta con independencia técnica y de gestión,³² a fin de que su actuación sea autónoma.

Lo anterior, sin que dicha acción implique un perjuicio para la actora, ya que este Tribunal actúa conforme a la normativa legal y protocolos correspondientes a fin de garantizar los derechos de los grupos históricamente vulnerados, como lo son las mujeres, juzgando con perspectiva de género. Aunado a que, en la instrucción del presente recurso, se dio vista a la Defensoría Pública de este Tribunal para los efectos legales a que hubiera lugar.

Por último, no pasa inadvertido que la actora en su demanda reclama el otorgamiento de medidas cautelares, sin embargo, ello resulta inviable en el caso que se analiza dado el sentido del fallo pues, tal y como lo ha establecido la Sala Superior,³³ las medidas cautelares constituyen un instrumento para conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento; por lo que, se trata de resoluciones que se caracterizan generalmente, por ser accesorias, en tanto que la determinación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves.

Por tanto, al haberse confirmado el desechamiento de la queja por no advertirse elementos mínimos que configuraran la VPMRG en perjuicio de la actora, la solicitud de medidas cautelares, al ser accesorias, siguen la misma suerte de la decisión sobre el trámite principal y, por ende, no se puede emitir un pronunciamiento sobre su procedencia.

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho planteadas, al ser infundados los agravios de la parte recurrente, lo procedente es **CONFIRMAR** en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo recurrido.

³² Artículo 3, de los Lineamientos de Funcionamiento de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense.

³³ Criterio sostenido en el expediente de clave SUP-REP-145/2025.

Por lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de desechamiento de denuncia dictado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en los autos del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES-038/2025.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría General de este Tribunal, realice la versión pública de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE personalmente por estrados a la actora; **por oficio** a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral; y **por estrados** a las demás personas interesadas